

Fecha Sanción 26 Dic. 2001
Publicado en Boletín Oficial B.O.N° 3/02 PAG. N° 39/44.-
Extracto DECLARASE EN ESTADO DE EMERGENCIA ECONOMICA Y FISCAL AL
REGIMEN DE PROMOCION NORMADO POR LEY 22702.-

San Fernando del Valle de Catamarca, 26 de Diciembre de 2001.

VISTO:

Las facultades conferidas a la Provincia de Catamarca por la Ley Nacional de Desarrollo Económico N° 22.021, su modificatoria N° 22.702 y el Decreto Nacional N° 804/96, sus modificatorios y complementarios, y

CONSIDERANDO:

Que la incorporación de capitales mediante la aplicación de la Ley de Desarrollo Económico N° 22.702 y del Decreto Nacional N° 804/96 incide, desde casi dos décadas, favorablemente sobre la estructura productiva provincial, tornando inadmisibles las consecuencias que derivarían de la caída de lo logrado en el marco promocional, haciendo estéril, por un lado, el esfuerzo económico realizado por la Nación y, por el otro, provocando situaciones incontrolables, sin alternativas de reemplazo, constituídas en eje económico de desarrollo y de contención social en todo el ámbito de la Provincia.

Que la situación de crisis por la que atraviesa el país ha trastocado los parámetros normales de la economía, poniendo en absoluta indefensión al sector productivo nacional y en particular al sector promovido provincial, determinando un paulatino descenso de la actividad que se traduce en hechos extremos de cierre de empresas o en la imposibilidad de que aquellas que no integran cumplan adecuadamente con las obligaciones contraídas en el marco promocional, comprometiendo la estabilidad económica y social de la Provincia.

Que es responsabilidad ineludible de las autoridades nacionales y provinciales de Gobierno, evaluar la situación imperante y tomar las medidas que resulten necesarias; para evitar consecuencias definitivas e irreversibles, en uso de las facultades diferenciadas que tanto la ley como sus decretos reglamentos les asignan; esto es, la autoridad de aplicación provincial, determinando las circunstancias que coadyuden al desarrollo económico y social de la Provincia verificando y evaluando cumplimientos de las condiciones establecidas y en su caso imponer sanciones, y la Nación, fiscalizando la correcta utilización de los beneficios otorgados.

Que es responsabilidad ineludible de las autoridades nacionales y provinciales de Gobierno, evaluar la situación imperante y tomar las medidas que resulten necesarias; para evitar consecuencias definitivas e irreversibles, en uso de las facultades diferenciadas que tanto la ley como sus decretos reglamentarios les asignan; esto es, la autoridad de aplicación provincial, determinando las circunstancias que coadyuden al desarrollo económico y social de la Provincia verificando y evaluando cumplimientos de las condiciones establecidas y en su caso imponer sanciones, y la Nación, fiscalización la correcta utilización de los beneficios otorgados.

Que la profunda preocupación sobre el presente y el futuro del sector productivo promovido, ha sido planteada reiteradamente, acompañando alternativas y propuestas ante el Gobierno Nacional sin haberse considerado ni adoptado hasta la fecha medidas consecuentes, por lo que dado la envergadura de la incidencia del sector promovido sobre la economía y el conjunto social provincial que configura un caso extraordinario, se habilita y legitima la intervención del Poder Ejecutivo Provincial, haciendo uso pleno de sus facultades de autoridad de aplicación, para tomar medidas fundadas en razones de extrema necesidad y urgencia destinadas a adecuar al sector promovido, a la realidad imperante para preservar y consolidar el desarrollo de su actividad productiva.

Que los objetivos y efectos derivados de la aplicación de la Ley Nacional N° 22021 y su modificatoria N° 22.702, para la Provincia de Catamarca, están orientados hacia la reducción de la brecha de desarrollo de la jurisdicción provincial con respecto a otras regiones del país y, por lo tanto, es exclusiva responsabilidad de ésta, monitorear e implementar las medidas conducentes a la efectiva ejecución de los proyectos para alcanzar los objetivos buscados.

Que corresponde que el Poder Ejecutivo Provincial en su carácter de autoridad de aplicación y, en uso de las facultades conferidas por los artículos 14° y 16° de Ley de Desarrollo Económico, el artículo 24° de su Decreto Reglamentario N° 3.319/79 modificatorio N° 1.810/83, controle y evalúe el grado de cumplimiento de las obligaciones promocionales en relación con los parámetros propios del proyecto como lo son la inversión, producción y personal, resolviendo ante las situaciones permanentes o coyunturales que se presenten y, determinando, sobre la base del conocimiento de sus empresas y el análisis objetivo de causales particulares o sectoriales, medidas que permitan asegurar la permanencia y consolidación de la inversión en favor del cumplimiento de los objetivos de la Ley.

Que la intervención al nivel expuesto, por intermedio de este decreto extraordinario, no significa desconocer la normativa existente ni las facultades de fiscalización de organismos nacionales en su responsabilidad de determinar la correcta utilización de los

beneficios otorgados, pero si pretende evitar que los parámetros propios del proyecto sean evaluados para la aplicación de sanciones y deméritos que concluyan en una reducción extrema por causas no punibles y ajenas al espíritu del sistema, sin la debida consideración de las circunstancias que motivan los posibles incumplimientos o sin contemplar la legítima facultad de participación previa de la autoridad de aplicación provincial en las determinaciones que se adopten.

Que las medidas propuestas encuadran en la estricta interpretación de las facultades que la Ley N° 22.021 y modificatoria N° 22.702, así como su Decreto Reglamentario N° 3.319/79 y su modificatorio N° 1.810/83, asigna a la autoridad de aplicación provincial que otorgó los beneficios promocionales, ratificado por el Decreto Nacional N° 850/90 (modif. por Decreto N° 1.340/90) y el Decreto Nacional N° 125/00, emitido por el actual Gobierno Nacional, por lo que los actos administrativos que dicte la misma tendrán absoluta legalidad y no estarán en pugna con las facultades de fiscalización de la Administración Federal de Ingresos Públicos (A.F.I.P./D.G.I.), ni con las que cuenta el Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos de la Nación.

Que la situación económica-financiera del país, de larga data, amerita reconocimiento de la emergencia que atraviesa el sector y, como la misma es de difícil solución inmediata, deben contemplarse y establecerse previsiones a futuro, por lo que a tales efectos, se hace necesario establecer un período transitorio de emergencia económica y fiscal, que permita transparentar el compromiso fiscal asumido por el Estado Nacional asimismo posibilite la aplicación de medidas tendientes a paliar la crisis por la que atraviesan los sectores productivos para alentar la concreción de las potencialidades de desarrollo iniciadas en el marco de los Regímenes de Promoción, asgurando la estabilidad jurídica y el sostenimiento de los derechos adquiridos de las empresas involucradas, como reaseguro de un factor fundamental para la estabilidad económica y social de la Provincia.

Que en el marco del período transitorio de emergencia económica y fiscal que se establece, los proyectos promovidos bajo Ley Nacional de Desarrollo Económico N° 22.021 y su modificatoria N° 22.702, sus modificaciones y normas reglamentarias, por el Decreto Nacional N° 804/96 y normas modificatorias y complementarias, podrán incorporarse a un Plan de Saneamiento y Ajuste definido a los efectos de posibilitar a las empresas promovidas la modificación de cuadros de inversión, costos, producción, personal y, en su caso, puestas en marcha a fin de ajustarlos a la realidad económica y operativa imperante en el período de emergencia que se declare.

Que en ningún caso, la modificación de los parámetros objeto del plan de saneamiento y ajuste incrementarán los costos fiscales calculados en el proyecto original.

Que deben establecerse pautas mínimas de formulación para los planes de saneamiento y ajusten que garanticen la permanencia de los puestos de trabajo ocupados al dictado del presente instrumento, no permitiéndose la reducción de la planta de personal existente, como promedio anual, hasta la finalización del período de emergencia que fija.

Que en concordancia con la emergencia fiscal corresponde, en relación con los proyectos no industriales, limitar razonables con los proyectos no industriales, limitar razonablemente la expedición de los certificados a que alude el artículo 2° del Decreto N° 1.232/96 y sus modificaciones a fin de permitir a los industriales, la reprogramación de los cuadros de costos fiscales no caducos en un monto acorde con la realidad imperante, definiendo mecanismos de traslado a ejercicios económicos cuyos cierres se produzcan con posterioridad al período de emergencia declarado.

Que, de acuerdo al artículo 8° del Decreto Nacional N° 2.054/92 (sustituido por el Decreto Nacional N° 69/97), corresponde determinar a los efectos promocionales, como primer ejercicio para los proyectos industriales aprobados en el marco del Decreto 804/96 sus modificatorios y complementarios, el ejercicio iniciado a partir de la permanencia en el régimen de sustitución formalizada con la primera utilización de Bono de Crédito Fiscal dispuesto por la Ley N° 23.658, y en consecuencia que la evaluación del grado de cumplimiento de los compromisos promocionales, de dichos proyectos, en verificaciones posteriores a la fecha de formalización de su permanencia en el régimen de sustitución, se efectúe en un todo de acuerdo a las disposiciones del artículo 2° del Decreto N° 69/97, considerando a los efectos de la aplicación de sanciones o deméritos, válidos los informes que al respecto emitan las Autoridades de Aplicación Provinciales a la Autoridad de Aplicación Nacional, derivados de la evaluación del grado de cumplimiento de las obligaciones promocionales definidas en los actos administrativos particulares respectivos.

Que asimismo, corresponde analizar y resolver con carácter de excepción y con la debida participación de las Autoridades Nacionales pertinentes, la situación derivada de aplicar criterios de evaluación del grado de cumplimiento de las obligaciones promocionales establecidas en los artículos 6° y 7° del Decreto N° 2.054/92 para proyectos industriales promovidos en el marco del Decreto Nacional N° 804/96 y normas modificatorias y complementarias, considerando un período, durante el cual, el contrato de promoción no se completa por razones operativas y de instrumentación que impidió al Estado Nacional acreditar en tiempo y forma los beneficios promocionales en las cuentas corrientes computarizadas y que, con un criterio de justicia, permite deslindar razonablemente responsabilidades de las empresas involucradas, correspondiendo establecer el momento desde el cual tendrá efectos la evaluación del grado de cumplimiento y la aplicación de escala de demérito.

Que debe considerarse incluido dentro de la normativa aplicable a emergencia económica y fiscal, lo establecido por el Decreto Provincial N° 425/01 -control de las variables de personal y producción- y el Decreto Provincial N° 424/01 -desarrollo de procesos de diversificación e integración productiva.

Que también corresponde ampliar el alcance del Decreto Provincial N° 425/01, en lo que respecta a los proyectos no industriales.

Que el Ministerio de Producción y Desarrollo en cumplimiento de sus funciones específicas resulta el organismo idóneo para actuar como autoridad de aplicación del presente decreto y que debe darse participación al Consejo Asesor para la Promoción del Desarrollo Económico de la Provincia de Catamarca en su carácter representativo de los sectores involucrados.

Que la totalidad de las medias que se adoptan por el presente instrumento legal, dado su carácter de emergencia temporal y

extraordinaria, no significan producir reformulaciones permanentes de los proyectos aprobados originalmente según el alcance de las limitaciones prescriptas por el artículo 30° del Decreto Nacional N° 2.054/92, el artículo 2° del Decreto Nacional N° 804/96 y el artículo 43° de la Ley Nacional N° 25.237, ni el otorgamiento de nuevos beneficios promocionales o el incremento de costos fiscales teóricos imputados por la Provincia de Catamarca en sus respectivos cupos presupuestarios.

Por ello,

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:

Art. 1°.- Declárase en Estado de Emergencia Económica y Fiscal el Régimen de Promoción normado por la Ley Nacional de Desarrollo Económico N° 22.021, su modificatoria N° 22.702, el Decreto Nacional N° 804/96, sus modificatorios y complementarios; reconociendo su origen a partir del 01 de Enero de 1.997 y con una proyección de permanencia hasta el 31 de Diciembre de 2.003. Considéranse incluidos en este artículo los actos administrativos a que se refiere el primer párrafo del artículo 2° del Decreto Nacional N° 804/96.

Art. 2°.- Impleméntase, durante el período determinado en el artículo 1° de este decreto, un Plan de Saneamiento y Ajuste que será aplicado a los proyectos no industriales que se financien con diferimientos impositivos y a los proyectos industriales, aprobados en el marco de la normativa mencionada en el artículo anterior, de conformidad con disposiciones que se estipulan en el Anexo que queda incorporado y forma parte del presente decreto.

Art. 3°.- Durante el período de Emergencia declarado en el artículo 1°, el Poder Ejecutivo Provincial en su carácter de autoridad de aplicación del mencionado régimen promocional y en resguardo de los efectos económicos y sociales derivados de la aplicación de los instrumentos promocionales, controlará y evaluará el grado de cumplimiento de las obligaciones contraídas por el sector promovido en referencia a los parámetros propios del proyecto como son la inversión, producción y personal, resolviendo ante las situaciones que se presenten e informando a los organismos nacionales pertinentes.

Art. 4°.- Designase autoridad de aplicación del presente instrumento al Ministerio de Producción y Desarrollo, quién deberá dictar las normas complementarias e interpretativas que sean necesarias para su efectiva aplicación debiendo receptor y resolver mediante emisión del acto administrativo pertinente, las presentaciones que efectúen las empresas promovidas.

Art. 5°.- Facúltase al Ministerio de Producción y Desarrollo, cuando así lo considere pertinente, a requerir el asesoramiento e intervención del Consejo Asesor para la Promoción del Desarrollo Económico de la Provincia de Catamarca, previo al dictado de los instrumentos legales correspondientes a cada proyecto en particular, incluido con el régimen del presente decreto.

Art. 6°.- Dispónese que sin perjuicio de las modificaciones realizadas mediante el plan de saneamiento y ajuste, las empresas promovidas, incluidas en las previsiones del presente decreto, no podrán reducir, alternativamente, la planta de personal promedio, en relación de dependencia afectada al proyecto del año calendario 2.001, la planta de personal promedio del período de tiempo de actividad incluido en los últimos cinco (5) años o el mínimo comprometido en el proyecto vigente a la fecha, lo menor, hasta la finalización del período de emergencia declarado por el artículo 1°. La falta de cumplimiento de la obligación indicada en el párrafo anterior hará pasible a la empresa de las sanciones previstas en la normativa.

Art. 7°.- Incorpórase al régimen de la emergencia económica y fiscal declarada por el artículo 1° lo dispuesto por los Decretos P. y D. (S.P.) N° 424/01 y N° 425/01, dejando establecido que las disposiciones de los artículos 1°, 2° y 3° del Decreto P. y D. (S.P.) N° 425/01, serán también de aplicación para los proyectos promovidos no industriales.

Art. 8°.- Cúrsese notificación según artículo 23° del Decreto Nacional N° 3.319/79 y sus modificatorias.

Art. 9°.- Tomen conocimiento a sus efectos: Ministerio de Producción y Desarrollo, Secretaría de Producción y Secretaría de Inversión para el Desarrollo Agropecuario.

Art. 10°.- Comuníquese, publíquese, dése al Registro Oficial y Archívese.-

Dr. OSCAR ANIBAL CASTILLO
Gobernador de Catamarca

Ing. Agr. Ernesto Mario Alvarez Morales
Ministro de Producción y Desarrollo

EMERGENCIA ECONOMICA Y FISCAL PLAN DE SANEAMIENTO Y AJUSTE PARA PROYECTOS FINANCIADOS CON DIFERIMIENTOS IMPOSITIVOS Y RADICACION INDUSTRIAL

EMERGENCIA ECONOMICA Y FISCAL AMBITO DE APLICACIÓN - RESTRICCIÓN FISCAL

1.- La Provincia de Catamarca, en su carácter de autoridad de aplicación del régimen promocional normado por Ley Nacional de Desarrollo Económico N° 22.021, su modificatoria N° 22.702, limitará desde el 1° de enero de 2.002 hasta el 31 de diciembre de 2.003 el otorgamiento de los certificados a que alude el artículo 2° del Decreto N° 1.232/96 y sus modificaciones, a un monto máximo anual equivalente al setenta por ciento (70%) de las inversiones totales previstas en la sumatoria de los cronogramas de inversión de los proyectos aprobados, vigentes a la fecha para cada uno de los años restantes del período de emergencia fiscal.

2.- Desde el 01 de Enero de 2.002 y hasta el 31 de Diciembre de 2.003, podrá utilizarse del total de bonos de crédito fiscal correspondientes a la jurisdicción, solo hasta el setenta por ciento (70%) del costo fiscal global de cada año, informado por la autoridad de aplicación provincial en la pertinente comunicación a la Secretaría de Hacienda de la Nación. En consecuencia la sumatoria de las utilidades en la totalidad de las cuentas corrientes computarizadas establecidas por los Decretos Nacionales N° 2.054/92 y 839/97, no podrá superar este límite.

Los costos fiscales que se reduzcan por aplicación del límite establecido en este punto serán trasladados para su restitución, de acuerdo al nuevo cuadro de utilización, que para cada caso se apruebe, a ejercicios económicos cuyos cierres se produzcan con posterioridad al 31 de Diciembre de 2.003, manteniendo el porcentaje de desgravación previsto para el ejercicio de imputación original.

Aquellas empresas que expresamente ratifiquen sus compromisos mínimos de personal y producción vigentes a la fecha, dentro del plazo establecido por este anexo para la presentación del plan de saneamiento y ajuste, no serán incluidas en los ajustes de costos fiscales sometidos a la restricción fiscal del primer párrafo.

PLAN DE SANEAMIENTO Y AJUSTE

3.- Autorízase la presentación de un Plan de Saneamiento y Ajuste, aplicable a los proyectos no industriales que se financien con diferimientos impositivos, a los efectos de acordar con las empresas promovidas la modificación de cuadros de inversión, costos, producción personal y, en su caso, objetos, localización, puestas en marcha y toda otra reorganización necesaria que se adecue a la realidad económica y operativa imperante, debiendo cursarse, cuando así corresponda, la comunicación a la que se refiere el artículo 3° del Decreto N° 1.232/96, dentro de los treinta (30) días de emitidos el acto administrativo pertinente.

La sumatoria de los nuevos cronogramas de financiamiento con diferimiento impositivo deberá contemplar la restricción fiscal prevista en el punto 1 de este Anexo y se aplicará a la totalidad de proyectos aprobados a la fecha de publicación del presente decreto.

En el caso de aquellos proyectos debidamente imputados que hubieran sido objeto de asignación a nuevos beneficiarios por caducidad de los originarios, se deberá considerar como sujeto obligado al designado en el último instrumento vigente.

La Autoridad de Aplicación del presente decreto establecerá el plazo de vigencia de las modificaciones a que se refiere el primer párrafo, el que podrá exceder cuando así lo considere necesario el término del estado de emergencia declarado en el artículo 1°.

4.- Autorízase la presentación de un Plan de Saneamiento y Ajuste, aplicable a los proyectos industriales, a los efectos de posibilitar, a opción de la empresa, la modificación de los requerimientos de personal y producción establecidos para sus proyectos en cada acto particular de otorgamiento de beneficios, hasta la proporción de la reducción de costos fiscales que en cada caso se produzca. Los ajustes que se practiquen tendrán carácter temporario, con vigencia por el período de emergencia declarado; asimismo se podrá reformular el cronograma de inversiones y determinar los efectos promocionales el primer ejercicio, en concordancia con lo estipulado en el segundo párrafo del artículo 8° del Decreto Nacional N° 2.054/92 sustituido por el artículo 2° Decreto Nacional N° 69/97, para los proyectos industriales aprobados en el marco del Decreto Nacional N° 804/96, sus modificatorios y complementarios.

En ningún caso la modificación de los parámetros objeto del plan de saneamiento y ajuste podrán incrementar los costos fiscales totales calculados en cada proyecto original.

5.- Los valores aprobados en función del plan de saneamiento y ajuste, que surjan de la aplicación del punto anterior, serán la base de compromiso mínimos exigidos según los incisos a), b) y c) del artículo 2° de la Resolución N° 1.280/92 (M.E. y O. y S.P. de la Nación) y, su relación con lo ejecutado, la pauta de control para la aplicación de la escala de demérito establecida por el artículo 3° del mismo instrumento, teniendo efecto, para los proyectos industriales aprobados en el marco del Decreto 804/96 sus modificatorios y complementarios, de acuerdo a lo estipulado por el artículo 5° del Decreto P. y D. (S.P.) N° 425/01.

6.- Para verificaciones posteriores a la fecha de formalización de permanencia en el régimen de sustitución, dentro del período de

emergencia y a los efectos de lo contemplado por el artículo 6° del Decreto Nacional N° 839/97, se considerará válidos, con carácter previo a las determinaciones que se adopten, los actos administrativos derivados de la evaluación del grado de cumplimiento de las obligaciones promocionales que emita y comunique la autoridad de aplicación provincial de los organismos nacionales pertinentes.

7.- Las empresas titulares de proyectos industriales a los que se les apruebe el Plan de Saneamiento y Ajuste en el período de Emergencia Económica y Fiscal, deberán presentar ante la AFIP-DGI, dentro de un plazo máximo de treinta (30) días corridos, contados a partir del día hábil siguiente al de la notificación del Acto Administrativo que así lo disponga, los formularios de declaración jurada emergentes del Decreto Nacional N° 1.355/90 (formularios SSFP1) con los ajustes practicados, indicando en "observaciones" el origen de la información suministrada.

La falta de cumplimiento de la obligación, en el tiempo y forma establecidas en el párrafo anterior, hará perder el efecto fiscal sobre la cuenta corriente computarizadas de las modificaciones extraordinarias realizadas al proyecto original en virtud de este decreto.

8.- Dentro de los treinta (30) días posteriores a la fecha de publicación del presente decreto las empresas incluidas en las previsiones del artículo 1° podrán manifestar su voluntad de prestación en el Plan de Saneamiento y Ajuste, el que deberá concretarse dentro de los sesenta (60) días posteriores al plazo indicado precedentemente; vencido este término o el de la fecha máxima de aplicación podrá realizar de oficio los ajustes que sean necesarios sobre los proyectos que no lo hubieran hecho, a los efectos de llegar al cumplimiento de las pautas generales de restricción fiscal establecidas por los puntos 1 y 2 de este Anexo, sin necesidad de ajustar los requerimientos mínimos previstos en los proyectos originales.

DISPOSICIONES GENERALES

9.- La autoridad de aplicación designada por el artículo 4° del presente decreto cursará las notificaciones de los actos particulares que se dictaren en consecuencia de acuerdo a lo establecido en el artículo 23° del Decreto Nacional N° 3.319/79 y sus modificatorios.